REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. VII Núm. 2 (2016): 1 – 11
-Crònica-

JURISPRUDENCIA AMBIENTAL EN CATALUÑA

(SEGUNDO SEMESTRE 2016)

p. 1-6

—

JURISPRUDÈNCIA AMBIENTAL A CATALUNYA

(SEGON SEMESTRE 2016)

p. 7-11

ANNA PALLARÈS SERRANO
Profesora agregada de Derecho Administrativo / Professora agregada de Dret Administratiu
Universitat Rovira i Virgili

El objetivo de esta crónica es señalar los pronunciamientos más relevantes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que se han producido en materia medioambiental en el periodo situado entre 20 de abril de 2016 y 13 de octubre de 2016. En concreto, son 6 las sentencias que nos han llamado la atención:

1. La primera, la sentencia núm. 390 desestima el recurso contencioso administrativo que tiene por objeto la pretensión anulatoria ejercida a nombre de la entidad Servicios Garona 2001, S.L. contra la resolución de 23 de diciembre de 2011 del Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya que establece "Ordenar la restauración de la realidad física alterada a la persona propietaria de la parcela 354 del polígono 2 de Les, en la actualidad la entidad mercantil Servicios Garona, SL, que también es la promotora de las obras ejecutadas ilegalmente….". El conflicto deriva del hecho que en base a una licencia municipal para uso agropecuario, sobre terrenos calificados de suelo no urbanizable de protección especial, incluidos en el "Plan de Espacios de Interés Natural Montanhes de Les e Bossost" y en la Red Natura 2000, se ha construido un edificio de planta rectangular con porche perimetral en tres de sus lados, que se compone de planta baja semienterrada por la zona oeste y planta bajo cubierta con dos niveles de una superficie aproximada de 105 m2, con salida de humos, antena de televisión, servicio de

[DOI: http://dx.doi.org/10.17345/rcda.1727]

agua fría y caliente y fosa séptica, que dispone de ventanas y puertas de acceso, unos espacios y unos acabados que claramente determinan que la naturaleza real de la construcción nada tiene que ver con una cabaña de pastor y almacenaje de forraje y maquinaria con uso agropecuario. Además, de la prueba pericial se deduce que lo construido resulta inadecuado para guardar maquinaria por las aberturas de que dispone. El tribunal apoya su decisión en la constatación de que la construcción realizada no tiene las características para cubrir las funciones y destinos propios de la actividad agraria, agrícola, ganadera o forestal (art. 84 del Decreto 287/2003, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento parcial de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo y art. 48 del Decreto 305/2006, de 18 de julio de 2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña). Según la Sala, ha existido por parte de la parte actora un intento de burlar la legalidad urbanística, haciendo pasar una construcción por lo que no es.

2. La segunda, la sentencia núm. 538 trae causa de un recurso de apelación contra la sentencia núm. 84, de 14 de marzo, dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo núm. 11 de Barcelona, desestimatoria de la demanda interpuesta por Don Desiderio y Doña Miriam contra el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú por la licencia de carácter extraordinaria concedida, el 28 de junio de 2011, por la Junta de Gobierno Local, a La Medusa-Accions Socioculturals, para la celebración, durante el 1, 2 y 3 de julio de 2011, del festival Faraday 2011 en el equipamiento municipal "El Molí del Mar", situado a pocos metros del domicilio de los apelantes. En esta sentencia nos encontramos ante idénticas partes, pretensiones y controversias que en la STSJ CAT núm. 163, de 14 de marzo de 2016 y, en consecuencia, existe un pronunciamiento también idéntico. La normativa que tiene presente la Sala, para resolver la controversia, es la Ley 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica, la Ley estatal 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, la Ley 11/2009, de 6 de julio, de regulación administrativa de los espectáculos públicos y las actividades recreativas, el Decreto 112/2010, de 31 de agosto, por el que se aprueba el reglamento de espectáculos públicos y actividades recreativas y la Ordenanza del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, reguladora del ruido y las vibraciones. Del análisis de la citada normativa la Sala concluye que el festival no podía beneficiarse del régimen de tolerancia acústica que prevé la Ordenanza de Vilanova porque dicho festival no puede considerarse una actividad extraordinaria, ya que no estamos ante un espectáculo musical esporádico desde el momento que el festival se ha

venido celebrando de forma regular y continuada desde el año 2006. De manera que cuando se otorgó la licencia objeto de controversia hacia unos cuantos años que se celebraba este festival de forma repetitiva y regular durante las mismas fechas. La Sala, además, señala que, aunque hubiese sido aplicable la normativa reguladora de los espectáculos y las actividades recreativas extraordinarias, la licencia objeto de controversia se hubiera tenido que denegar por no encontrarse el festival en una de las situaciones establecidas por el art. 112 del Decreto 112/2010:

— Que se celebre con motivo de fiestas y verbenas populares o de festivales o certámenes que cuenten con una amplia participación de la población directamente afectada.

— Que se celebre en fechas o vigilias festivas, dentro de horarios en que su impacto sea admisible para usos sociales mayoritarios.

— Que se celebre en lugares situados a la distancia necesaria de núcleos habitados, de manera que no cause molestias perceptibles a la gente que vive en ellos.

En consecuencia, la sala decide estimar parcialmente el recurso y, por ello, se revoca y se deja sin efecto la Sentencia núm. 84, de 14 de marzo de 2014, dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo núm. 11 de Barcelona, y, en su lugar, se estima parcialmente el recurso contencioso administrativo y, por ello, se anula la licencia de carácter extraordinario concedida el 28 de junio de 2011 a La Medusa-Accions Socioculturals y se reconoce el derecho de los actores a percibir una indemnización de 3.000 euros a cargo del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú.

3. La tercera sentencia es fruto de un recurso de apelación, interpuesto por Don Rogelio, que pretende la revocación de la sentencia núm. 228 de 5 de septiembre de 2011, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Barcelona, que desestima el recurso interpuesto contra el Decreto del Alcalde de Sitges, número 425/2009, exclusivamente en lo referente al punto tercero que otorga licencia ambiental para la actividad de prestación de servicios funerarios con incineración a la empresa Gestió Integral de Cementiris de Nomber S.L., y que se dicte otra sentencia estimando íntegramente el recurso y anulando el punto tercero del citado Decreto del Alcalde de Sitges. Los fundamentos jurídicos que le sirven a la sala para estimar el recurso de apelación, revocar la sentencia apelada y, en consecuencia, estimar el recurso

contencioso-administrativo, anulando y dejando sin efecto el apartado tercero del Decreto citado, son básicamente dos:

a) El Plan de Ordenación Urbanística Municipal de Sitges no agota la ordenación de los terrenos reservados para el equipamiento de cementerio, con clave D8. Solo "prevé el índice de edificabilidad neta, de 0,2 m2techo/m2suelo, y la ocupación máxima de parcela del 40% de edificación, dos únicos parámetros con los que no puede concederse directamente la licencia de edificación, por lo que los terrenos precisan de completar la ordenación y fijar todos los parámetros urbanísticos, mediante una figura de planeamiento derivada, de conformidad con lo previsto en el citado artículo 94.2 de las Normas Urbanísticas, que hace referencia al Plan de Mejora Urbana, todo ello sin perjuicio de la necesaria gestión urbanística posterior […]".

b) El Decreto de alcaldía impugnado solo incluye una prescripción de las varias que se incluyen sobre las emisiones a la atmósfera por el informe integral de la OGAU de los Servicios Territoriales del Departament de Medi Ambient i Vivenda de la Generalitat de Catalunya, cuando estos informes son vinculantes si son desfavorables o imponen medidas preventivas, de control o de garantía.

4. La cuarta, la sentencia 513 de 6 de julio de 2016 responde a un recurso contencioso administrativo, interpuesto por Don Desiderio, que impugna el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona, de 12 de mayo de 2011, que aprueba definitivamente el Plan de Ordenación Urbanística Municipal de Sant Vicenç de Montalt, solicitando la declaración de nulidad del citado plan. El fallo estima en parte el recurso y declara nulo de pleno derecho el Plan de Ordenación Urbanística Municipal de Sant Vicenç de Montalt por falta del trámite de evaluación ambiental estratégica. La argumentación jurídica que respalda tal decisión la encontramos, de manera clara, en el fundamento de derecho sexto que afirma que la obligación de que en el procedimiento administrativo de elaboración y aprobación de los planes se integren una serie de actuaciones que permitan su evaluación ambiental es aplicable a los planes y proyectos cuyo primer acto preparatorio formal sea posterior al 21 de julio de 2004, según la disposición transitoria primera de la Ley 9/2006. Las actuaciones que han de permitir una evaluación ambiental del plan a las que se refiere la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente - que transpone la Directiva 2001/42/CE, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente – son: a) la elaboración de un informe de

sostenibilidad ambiental. b) la elaboración de consultas. c) la elaboración de la memoria ambiental. d) la consideración del informe de sostenibilidad ambiental, del resultado de las consultas y de la memoria ambiental en la toma de decisiones. e) la publicidad de la información sobre la aprobación del plan o programa. Por el incumplimiento de tales requerimientos resulta insuficiente la documentación ambiental incorporada al plan y, como consecuencia, el plan incide en nulidad de pleno derecho "por haber prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, al haberse omitido un trámite esencial del mismo".

5. En último lugar, comentaremos las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña núm. 383, de 7 de junio de 2016, y núm. 427, de 22 de junio de 2016. Ambas sentencias son el resultado de la interposición de sendos recursos contenciosos administrativo - en la primera el recurso lo interpone Josel, SL y en la segunda la parte demandante es Promocions Sant Ramón Viladecans, SL - que impugnan el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona, de 15 de diciembre de 2011, que aprueba de forma definitiva el Plan especial urbanístico de protección del ámbito forestal de Viladecans, solicitando la anulación de dicho acuerdo. El fallo, en ambos pronunciamientos, estima en parte los recursos contenciosos administrativo declarando nulos de pleno derecho, en su integridad, el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo y el instrumento de planeamiento que aprueba por falta de evaluación económica y financiera y de evaluación ambiental estratégica. En relación a la ausencia de la evaluación ambiental estratégica, las partes demandadas (la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Viladecans), en base a que en el anexo 1 de la Ley catalana 6/2009, de 28 de abril, de evaluación ambiental de planes y programas, donde se relacionan los planes y programas que se han de someter a evaluación ambiental, no aparecen específicamente relacionados los planes especiales, no someten el Plan especial urbanístico de protección del ámbito forestal de Viladecans a la evaluación ambiental estratégica. Al respecto, la Sala recuerda, en primer lugar, que aunque no se mencione en el anexo 1 de la citada norma los planes especiales sí que aparecen otros planes, algunos de "inferior entidad y alcance jurídico" que la de un plan especial, y el plan general, cuya relación con el plan especial no solo deriva del principio de jerarquía sino que también del principio de especialidad, que hace que los planes especiales tengan cierta autonomía respecto de los demás instrumentos de planeamiento ordenados jerárquicamente y, en segundo término, que ya en la Directiva 2001/42/CE se establece la aplicación de la

evaluación ambiental estratégica a este tipo de planes y de la misma manera se manifiesta la ley estatal 9/2006, de 28 de abril, que la transpone. Como resultado se afirma que resulta "insuficiente la documentación medioambiental incorporada al plan, que incide por ello […] en causa de nulidad de pleno derecho, por haber prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, al haberse omitido un trámite esencial del mismo, como lo es el de la evaluación ambiental estratégica".

L'objectiu d'aquesta crònica és assenyalar els pronunciaments més rellevants del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que han tingut lloc pel que fa a medi ambient en el període entre el 20 d'abril de 2016 i el 13 d'octubre de 2016. En concret, les sentències que ens han cridat l'atenció són sis:

1. La primera, la Sentència núm. 390, desestima el recurs contenciós administratiu que té com a objecte la pretensió anul·lativa exercida a nom de l'entitat Servicios Garona 2001, SL, contra la Resolució de 23 de desembre de 2011 del conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya que estableix: "Ordenar la restauració de la realitat física alterada a la persona propietària de la parcel·la 354 del polígon 2 de Les, actualment l'entitat mercantil Servicios Garona, SL, que també és la promotora de les obres executades il·legalment". El conflicte deriva del fet que, basant-se en una llicència municipal per a ús agropecuari de terrenys qualificats de sòl no urbanitzable de protecció especial, inclosos en el Pla d'Espais d'Interès Natural Montanhes de Les e Bossòst i en la xarxa Natura 2000, s'ha construït un edifici de planta rectangular amb porxo perimetral en tres dels seus costats que es compon de planta baixa semisoterrada per la zona oest i planta sota coberta amb dos nivells d'una superfície aproximada de 105 m2, amb sortida de fums, antena de televisió, servei d'aigua freda i calenta i fossa sèptica, que disposa de finestres i portes d'accés, espais i acabats que clarament determinen que la naturalesa real de la construcció no té res a veure amb una cabana de pastor i emmagatzematge de farratge i maquinària amb ús agropecuari. A més, de la prova pericial es dedueix que la construcció resulta inadequada per emmagatzemar maquinària per les obertures de què disposa. El Tribunal dóna suport a la seva decisió en la constatació que la construcció que s'ha edificat té les característiques per dur a terme les funcions i destinacions pròpies de l'activitat agrària, agrícola, ramadera o forestal (article 84 del Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març, d'Urbanisme, i article 48 del Decret 305/2006, de 18 de juliol de 2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme de Catalunya). Segons la Sala, per part de la part actora hi ha hagut un intent d'eludir la legalitat urbanística fent passar una construcció per allò que no és.

2. La segona, la Sentència núm. 538, porta causa d'un recurs d'apel·lació contra la Sentència núm. 84, de 14 de març, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, desestimatòria de la demanda interposada pel senyor Desiderio i la senyora Miriam contra l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per la llicència de caràcter

extraordinària concedida el 28 de juny de 2011 per la Junta de Govern Local a La Medusa-Accions Socioculturals per a la celebració, durant l'1, 2 i 3 de juliol de 2011, del festival Faraday 2011 en l'equipament municipal El Molí del Mar, situat a pocs metres del domicili de les parts apel·lants. En aquesta sentència ens trobem davant de parts, pretensions i controvèrsies idèntiques que en la STSJ CAT núm. 163, de 14 de març de 2016 i, en conseqüència, hi ha un pronunciament també idèntic. La normativa que la Sala té present per resoldre la controvèrsia és la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, la Llei estatal 37/2003, de 17 de novembre, del soroll; la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives; el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, i l'Ordenança de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú reguladora del soroll i les vibracions. De l'anàlisi de la normativa esmentada, la Sala conclou que el festival no podia beneficiar-se del règim de tolerància acústica que preveu l'Ordenança de Vilanova perquè aquest festival no pot considerar-se una activitat extraordinària, ja que no som davant un espectacle musical esporàdic des del moment que el festival s'ha celebrat de forma regular i continuada des del 2006. De manera que, quan es va atorgar la llicència objecte de controvèrsia, feia uns quants anys que se celebrava aquest festival de forma repetitiva i regular durant la mateixa data. La Sala, a més, assenyala que, encara que hagués estat aplicable la normativa reguladora dels espectacles i les activitats recreatives extraordinàries, la llicència objecte de controvèrsia s'hauria d'haver denegat perquè el festival no es trobava en cap de les situacions que estableix l'article 112 del Decret 112/2010:

— Que se celebri amb motiu de festes i revetlles populars o de festivals o certàmens que tinguin una àmplia participació de la població directament afectada.

— Que se celebri en dates o vigílies festives, en horaris en què l'impacte sigui admissible per a usos socials majoritaris.

— Que se celebri en llocs situats a la distància necessària de nuclis habitats, de manera que no causi molèsties perceptibles a la gent que hi viu.

En conseqüència, la Sala decideix estimar parcialment el recurs i, per això, es revoca i es deixa sense efecte la Sentència núm. 84, de 14 de març de 2014, dictada pel Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, i s'estima parcialment el recurs contenciós administratiu, per la qual cosa s'anul·la la llicència de caràcter extraordinari concedida el 28 de juny de 2011 a La Medusa-Accions Socioculturals i es reconeix el dret

de les parts actores a percebre una indemnització de 3.000 euros a càrrec de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

3. La tercera sentència és fruit d'un recurs d'apel·lació, interposat pel senyor Rogelio, que pretén revocar la Sentència núm. 228, de 5 de setembre de 2011, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, que desestima el recurs interposat contra el Decret de l'alcalde de Sitges número 425/2009 exclusivament referent al punt tercer, que atorga llicència ambiental per a l'activitat de prestació de serveis funeraris amb incineració a l'empresa Gestió Integral de Cementiris de Nomber, SL, i que es dicti una altra sentència que estimi íntegrament el recurs i anul·li el punt tercer de l'esmentat decret de l'alcalde de Sitges. Els fonaments jurídics que li serveixen a la Sala per estimar el recurs d'apel·lació, revocar la sentència apel·lada i, en conseqüència, estimar el recurs contenciós administratiu, de manera que s'anul·la i deixa sense efecte l'apartat tercer del Decret, són bàsicament dos:

a) El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sitges no esgota l'ordenació dels terrenys reservats per a l'equipament de cementiri, amb clau D8. Només "preveu l'índex d'edificabilitat neta, de 0,2 m2 sostre / m2 solc, i l'ocupació màxima de parcel·la del 40% d'edificació, dos únics paràmetres amb els quals no es pot concedir directament la llicència d'edificació, per la qual cosa els terrenys necessiten completar l'ordenació i fixar tots els paràmetres urbanístics, mitjançant una figura de planejament derivada, de conformitat amb el que preveu l'article 94.2 de les Normes urbanístiques, que fa referència al Pla de Millora Urbana, tot això sense perjudici de la necessària gestió urbanística posterior".

b) El Decret d'alcaldia impugnat solament inclou una prescripció de les diverses que inclou sobre les emissions a l'atmosfera l'informe integral de l'OGAU dels Serveis Territorials del Departament de Medi o Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, quan aquests informes són vinculants si són desfavorables o imposen mesures preventives, de control o de garantia.

4. La quarta, la Sentència núm. 513, de 6 de juliol de 2016, respon a un recurs contenciós administratiu, interposat pel senyor Desiderio, que impugna l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, de 12 de maig de 2011, que aprova definitivament el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Vicenç de Montalt, i sol·licita la declaració de nul·litat del pla esmentat. La resolució estima en part el recurs i declara nul de ple dret el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Vicenç de Montalt perquè

falta el tràmit d'avaluació ambiental estratègica. L'argumentació jurídica que dóna suport a tal decisió la trobem, de manera clara, en el fonament de dret sisè, que afirma que l'obligació que en el procediment administratiu d'elaboració i aprovació dels plans s'integrin una sèrie d'actuacions que en permetin l'avaluació ambiental és aplicable als plans i projectes el primer acte preparatori formal dels quals sigui posterior al 21 de juliol de 2004, segons la disposició transitòria primera de la Llei 9/2006. Les actuacions que han de permetre una avaluació ambiental del Pla a les quals es refereix la Llei 9/2006, de 28 d'abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient —que trasllada la Directiva 2001/42/CE, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient—, són: a) l'elaboració d'un informe de sostenibilitat ambiental; b) l'establiment de consultes; c) l'elaboració de la memòria ambiental; d) la consideració de l'informe de sostenibilitat ambiental, del resultat de les consultes i de la memòria ambiental en la presa de decisions; i i) la publicitat de la informació sobre l'aprovació del pla o programa. Per l'incompliment d'aquests requeriments, resulta insuficient la documentació ambiental que s'ha incorporat al Pla i, per tant, aquest incideix en nul·litat de ple dret "per haver prescindit totalment i absolutament del procediment legalment establert, ja que se n'ha omès un tràmit essencial".

5. En darrer lloc, comentarem les sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya núm. 383, de 7 de juny de 2016, i núm. 427, de 22 de juny de 2016. Ambdues sentències són el resultat de la interposició de sengles recursos contenciosos administratius —en la primera el recurs l'interposa Josel, SL, i en la segona la part demandant és Promocions Sant Ramon Viladecans, SL— que impugnen l'Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, de 15 de desembre de 2011, que aprova de forma definitiva el Pla Especial Urbanístic de Protecció de l'Àmbit Forestal de Viladecans, i que sol·liciten l'anul·lació d'aquest acord. La resolució, en tots dos pronunciaments, estima en part els recursos contenciosos administratius i declara nuls de ple dret, en la seva integritat, l'Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme i l'instrument de planejament que aprova per falta d'avaluació econòmica i financera i d'avaluació ambiental estratègica. En relació amb l'absència de l'avaluació ambiental estratègica, les parts demandades (la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Viladecans), basant-se que en l'annex 1 de la Llei catalana 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes, en què es relacionen els plans i programes

que s'han de sotmetre a avaluació ambiental, no apareixen específicament relacionats els plans especials, no sotmeten el Pla Especial Urbanístic de Protecció de l'Àmbit Forestal de Viladecans a l'avaluació ambiental estratègica. Sobre aquest tema, la Sala recorda, en primer lloc, que, encara que els plans especials no s'esmentin en l'annex 1 de la norma al·ludida, sí que apareixen altres plans, alguns d' "inferior entitat i abast jurídic" que la d'un pla especial, i el pla general, la relació del qual amb el pla especial no solament deriva del principi de jerarquia sinó també del principi d'especialitat, que comporta que els plans especials tinguin certa autonomia respecte dels altres instruments de planejament ordenats jeràrquicament; i, en segon terme, que ja la Directiva 2001/42/CE estableix l'aplicació de l'avaluació ambiental estratègica a aquest tipus de plans i de la mateixa manera es manifesta la Llei estatal 9/2006, de 28 d'abril, que la trasllada. Com a resultat s'afirma que és "insuficient la documentació mediambiental incorporada al pla, que incideix per això […] en causa de nul·litat de ple dret, per haver prescindit totalment i absolutament del procediment legalment establert, ja que se n'ha omès un tràmit essencial, com és el de l'avaluació ambiental estratègica".